

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral instaurado por GLADIS PATRICIA LOPERA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- (Radicado 05001-31-05-021-2020-00331-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a la abogada María Camila Mesa Montoya, con tarjeta profesional No. 317.094 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

### ANTECEDENTES

Pretende la demandante el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de parte de Colpensiones causada por el fallecimiento de su cónyuge, Humberto de Jesús Castro García, bajo la égida de la condición más beneficiosa, con el correlativo pago de los intereses moratorios o, en subsidio, suyo la indexación y las costas del proceso.

Al efecto, narró que el 14 de abril de 2003 falleció Humberto de Jesús Castro García por causa del conflicto armado, encontrándose afiliado a Colpensiones como cotizante inactivo, habiendo alcanzado un total de 338.42 semanas

previo al 01 de abril de 1994. Que contrajo matrimonio con el causante el 24 de diciembre de 1980, fecha desde la que convivieron bajo el mismo techo compartiendo lecho y mesa hasta su muerte, unión de la que procrearon a 4 hijos quienes a la fecha son mayores de edad. Adujo que no se presentaron separaciones y que siempre se dedicó al hogar, siendo su cónyuge la persona que a través de su labor independiente aportaba lo necesario para costear la manutención de su familia, responsabilidad que a su vez le impidió generar aportes a la seguridad social desde el año 1984. Agregó que a la fecha cuenta con 56 años de edad y tiene enfermedades de carácter incurable y de permanente tratamiento como hernias discales e hipertensión, también tiene la calidad de madre cabeza de hogar por tener la obligación a la muerte de su cónyuge de asumir las riendas de su hogar, y es una persona de especial protección por sus condiciones económicas precarias. Para la época de la muerte procedió con la reclamación del derecho pensional que fue negado por acto administrativo 18350 de 2004, la que fue confirmada por Resolución 16204 de 2010 lo que impulsó el trámite ordinario que le correspondió el radicado 05001310500320550010500, resultando la decisión desfavorable a sus intereses. Advierte la inexistencia de cosa juzgada por basarse el pedimento en esta oportunidad al análisis de la SU 005 de 2018 que varía el panorama en cuanto a las condiciones de derecho. El 10 de julio de 2020 elevó nuevamente solicitud de reconocimiento ante Colpensiones, siendo negada la prestación por la Resolución SUB163434 de 2020 por tramitarse en vida la indemnización sustitutiva y ser improcedente la condición más beneficiosa en este caso.

COLPENSIONES al dar respuesta a la demanda, aceptó los fundamentos fácticos referidos a la calidad de afiliado del fallecido, el matrimonio celebrado, la fecha de la muerte, las reclamaciones elevadas y el proceso judicial cursado, pero con oposición a las pretensiones por considerar en primera medida la configuración de una cosa juzgada y luego, observar improcedente el salto normativo según conveniencia o favorecimiento del interesado. Formuló como excepciones de mérito las que denominó cosa juzgada formal y material, inexistencia del derecho de reconocer la pensión de sobrevivencia por condición más beneficiosa e inexistencia de expectativa legítima, prescripción,

improcedencia de intereses de mora, buena fe de la entidad demandada, imposibilidad de condena en costas e improcedencia de la indexación.

Aunque el reparto inicial correspondió al Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín por satisfacción de lo regulado en los Acuerdos PCSJA20-11650 del 28 de octubre de 2020 y CSJANTA21-16 de febrero de 2021, se remitió el proceso al Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, dependencia que avocó conocimiento por auto del 04 de junio de 2021 (Archivo 12), y en providencia que emitió el 22 de febrero de 2022 decidió ABSOLVER a Colpensiones de todas las pretensiones de la demanda por no encontrar satisfecho el test de procedencia que ha impuesto la Corte Constitucional para estos eventos, imponiendo las costas procesales a cargo de la demandante. Como agencias en derecho fijó la suma de \$250.000.

La activa a través de su apoderado judicial aspira que se revoque la decisión, toda vez que a su juicio el test de procedencia si se encuentra superado, aduciendo que contrario a lo advertido por la Juez y en relación con el primero de los requisitos, que por demás enfatiza debió ser acreditado para el momento de la muerte no para cuando se impulsó la demanda, la actora demostró ser una persona en condición de debilidad manifiesta por su calidad de madre cabeza familia en el momento que acaeció la muerte, pues desde allí debió asumir las riendas de la familia ante cuatro hijos, donde si bien uno de ellos cooperó económicamente dejando de estudiar, esa circunstancia no desvirtúa esa calidad, pues esa ayuda derivaba del taller que era del fallecido, donde la demandante también ayudaba para la obtención de ingresos. Advirtió que no solo esta exigencia se cumple, sino que quedó debidamente probada la necesidad económica, las razones por las cuales el afiliado cesó sus cotizaciones al sistema y se tuvo una actitud diligente para la reclamación del derecho, perseguida desde el año 2004 cuando se elevó la primera de las peticiones, habiendo incluso un proceso judicial impulsado con resultas insatisfactorias.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

## CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario que Humberto de Jesús Castro García y Gladis Patricia Lopera contrajeron matrimonio el 24 de diciembre de 1980 (Pág. 30 Archivo 02) y que Humberto de Jesús falleció por causas de origen común el 14 de abril de 2003 (Pág. 110 Archivo 02), sin dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes con base a las exigencias del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues se encontraba afiliado al RPMPD como cotizante inactivo desde marzo de 1984 (Págs. 107-109 Archivo 02), para cuando alcanzó 338.42 semanas aportadas.

Con base a ello, sería del caso determinar si Humberto de Jesús Castro García dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes bajo el principio constitucional de la condición más beneficiosa, caso afirmativo en el que habría de analizarse la calidad de beneficiaria de Gladis Patricia Lopera en su calidad de cónyuge del fallecido.

Pero para definir lo debatido y profundizar sobre la satisfacción del test de procedencia que la jurisprudencia constitucional ha delimitado como exigencia para que se permita en asuntos como el presente el salto al Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de sobrevivientes deprecada, debe esta colegiatura atender el principal argumento de defensa de la convocada y que se refiere a la cosa juzgada, en tanto no puede pasarse por alto la existencia del trámite ordinario adelantado previamente bajo el radicado 003-2005-00105-00 que resolvió la situación jurídica de la demandante desde el año 2009 frente a igual contingencia, debiendo en ese orden analizarse esa excepción pese a que la Juez consideró que por variar los fundamentos de la pretensión, era permitido el estudio solo de los nuevos supuestos a partir de los elementos que si constituyen cosa juzgada.

En este punto se memora que para que se configure la existencia de esa institución de acuerdo al artículo 303 del Código General del Proceso, debe haber identidad de: (i) personas o sujetos, esto es, que se trate de los mismos demandante y demandado; (ii) objeto o cosa pedida, es decir, del beneficio jurídico que se reclama, y (iii) causa para pedir, que se refiere al fundamento

fáctico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado (Ver SL 97-2019, SL4665-2021 y SL2406-2022).

Esta figura tiene como propósito dejar en firme todas aquellas decisiones que hayan sido pronunciadas por los jueces conforme a derecho, para no reactivar dichos procesos de manera indefinida, alterando así la seguridad jurídica que para las partes representa un fallo proferido (Ver SL1688-2022).

En este caso, atendiendo las providencias judiciales emitidas dentro del juicio enunciado de cara a lo que se busca en este nuevo escenario jurídico, se encuentra que existe: 1) Identidad jurídica de partes: ya que la activa y pasiva coinciden plenamente y son Gladis Patricia Lopera y Colpensiones; 2) Identidad de objeto: en ambos litigios se pretende obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada con la muerte del señor Castro García, hecho que acaeció el 14 de abril de 2003; y 3) Identidad de causa: en ambos procesos se solicitó el reconocimiento de la prestación teniendo en cuenta la calidad de cónyuge de Gladis Patricia Lopera con convivencia vigente a la data de la muerte, así como el tiempo cotizado de 338.42 semanas en toda su vida laboral previo al 01 de abril de 1994.

De ello se colige que desde el escrito de oposición de la enjuiciada le asistía razón en cuanto a que ocurrió el fenómeno aducido, puesto que ojeados los litigios se cumplen los elementos que lo configuran y no se evidencia ningún hecho nuevo o sobreviniente que pueda alterar las circunstancias fácticas o la causa de la demanda, lo que quiere decir que ante la configuración jurídica de los presupuestos de la cosa juzgada, ésta debía declararse.

Y es que debe precisarse que la jurisprudencia desde tiempo atrás ha señalado que el cambio de precedente no constituye un hecho nuevo que logre desvirtuar el principio de la cosa juzgada, dado que no pueden reabrirse indefinidamente los procesos cada vez que se presenten transformaciones en la línea jurisprudencial, sobre todo porque, en su momento, los mismos se resolvieron en prevalencia del derecho sustancial y respetando el alcance que a la fecha tenían las disposiciones legales que regulaban el caso concreto (Ver

CSJ SL, 7 julio 2009, radicación 36910, SL624-2013, SL11553-2015, SL1688-2022).

De ese modo, se evitan pronunciamientos contradictorios y se garantiza la definición de los problemas jurídicos y que estos se vuelvan interminables, con lo que se da certeza a lo ya definido, impidiendo un nuevo estudio de la situación ya revisada, pues ello implicaría que en las partes se mantenga la expectativa sin límite de tiempo, por manera que los criterios jurisprudenciales no pueden menoscabar la intangibilidad de las sentencias, sobre todo cuando estas pusieron fin por razones legales a los procesos que en su momento se adelantaron (SL4746-2020 y SL3386-2022).

Así pues, a pesar de que actualmente la intelección del principio de la condición más beneficiosa es disímil, lo cierto es que antes esta postura era diferente y sobre su vigencia se resolvió un proceso previo a este, sin que el mero cambio de jurisprudencia habilite, en modo alguno, afectar la intangibilidad de una sentencia que ya ha definido el derecho debatido entre quienes fueron sus partes, siendo irrefutable el impedimento que existe para reabrirlo.

Es bajo esas consideraciones, que debe negarse el derecho que pretende la demandante, sin que se haga necesario auscultar el material probatorio para determinar la satisfacción o no de los presupuestos que contiene el test de procedencia, pues la falladora atendiendo los antecedentes judiciales de este trámite, se encontraba impedida para resolver el mismo conflicto, pues debió someterse a la presunción de certeza y legalidad de la primera sentencia, sin que el cambio jurisprudencial sirva de excusa para haber dejado sin piso una decisión en firme, debiendo en ese orden confirmarse la providencia absolutoria pero por las razones que acaban de exponerse.

Las costas en esta instancia son a cargo de la parte demandante conforme lo pregonado en el artículo 365-1 del CGP. En esta sede se fijan las agencias en derecho en la suma de \$200.000.


**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia venida en apelación de fecha y procedencia conocidas, pero por las razones esbozadas en la parte motiva.

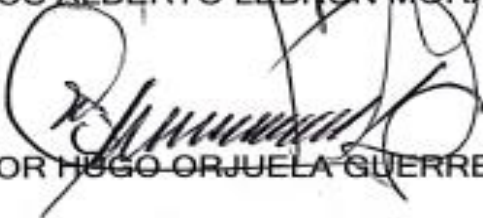
Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$200.000.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

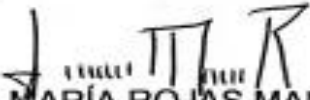
Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA  
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 05001310502120200033101  
**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Demandante:** GLADIS PATRICIA LOPERA  
**Demandado:** COLPENSIONES  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 16/03/2023  
**Decisión:** CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 17/03/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**

Secretario